

# **Comité Local De Gobierno**

Un instrumento para la promoción de convivencia en el Posacuerdo

**Luis Mauricio Cañaveral Ruiz**

Trabajo de grado

**Maestría en Gobierno y Políticas Públicas**

**EAFIT**

**Junio de 2016**

## Tabla de Contenido

1. Resumen .....	3
2. Introducción .....	4
3. El Comité Local de Gobierno: instrumento de intervención público .....	5
4. La convivencia y el posacuerdo .....	12
5. La Experiencia .....	12
6. El Reto .....	18
7. Recomendaciones .....	21
8. Conclusiones .....	22
9. Referencias .....	25

# Comité Local de Gobierno

Un instrumento para la promoción de la convivencia en el Posacuerdo<sup>1</sup>

Luis Mauricio Cañaveral Ruiz<sup>2</sup>

## Resumen

Colombia está ad portas de la firma de un acuerdo para la terminación del conflicto armado con la guerrilla de las Farc. Las decisiones tomadas desde el Gobierno Nacional afectan directamente a los gobiernos locales. Se hace necesario contar con instrumentos que logren implementar estrategias que promuevan la convivencia en todos los niveles de la sociedad. Este artículo pretende demostrar que Medellín cuenta con una herramienta denominada Comité Local de Gobierno, que puede asumir el reto de implementar, promover y fortalecer las estrategias derivadas de los *Acuerdos de la Habana* enfocados a la convivencia.

## Abstract

Colombia is ad portas of the signing of an agreement for the termination of the armed conflict with the Farc guerrillas. The decisions from the Government directly affect local governments. It is necessary to have tools that implement strategies that promote coexistence at all levels of society. This article aims to demonstrate that Medellin has a tool called the Committee on Local Government, which can take on the challenge of implementing, promoting and strengthening strategies arising from the Havana agreements focused on coexistence.

**Palabras Clave:** Convivencia, Medellín, Comuna 7, Posacuerdo, Gobierno, Reinserción.

**Key words:** Coexistence, Medellín, 7 commune, Posacuerdo, Government, reintegration.

---

<sup>1</sup>Trabajo de grado para optar al título de maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Universidad Eafit, Junio de 2016. Asesora: MA. Paola Andrea Escobar Blanco

<sup>2</sup> Historiador Universidad de Antioquia. mauricio.canaveral@hotmail.com

## Introducción

La Presidencia de Colombia y las AUC<sup>3</sup> firmaron a finales del año 2003, un acuerdo para la desmovilización de los combatientes de este grupo armado. Este tipo de acuerdos a nivel nacional afectan de manera directa a los gobiernos locales, convirtiendo temas como la convivencia en un reto, de tal manera que estrategias para su promoción con miras a la implementación de los posacuerdos, se convierten en aportes desde los municipios para el beneficio del proceso y el logro de los objetivos planteados.

A partir del año 2004, la Alcaldía de Medellín protagonizó el proceso de desmovilización de las AUC atendiendo a los primeros grupos de reinsertados. Esta circunstancia involucró a toda la ciudadanía, puesto que es la sociedad la principal afectada a partir de la implementación de los posacuerdos. Medellín no fue ajena a esta coyuntura y asumió el compromiso.

En Medellín el proceso de desmovilización requirió del acompañamiento de la administración municipal para garantizar su desarrollo. Para ello desde la Secretaría de Gobierno se creó un órgano administrativo encargado entre otros asuntos, de promover mecanismos participativos con miras a la promoción de la convivencia, la resolución pacífica de conflictos y la atención de las demandas ciudadanas. Fue entonces el inicio del *Comité Local de Gobierno* (CLG).

Por lo tanto, el CLG surgió como instrumento de intervención para cumplir entre otros objetivos, el reto de promover la convivencia a partir de la entrada en vigencia del proceso de desmovilización de las autodefensas, durante el período (2004-2007) de la administración municipal de Medellín<sup>4</sup>. Adicionalmente, siendo una acción gubernamental aplicada directamente en el territorio, le permitió al mandatario local mediante los funcionarios delegados, mantener una relación de mutua comunicación con la ciudadanía. Teniendo en cuenta que en la medida en que la ciudadanía experimentara los avances del proceso de desmovilización y los aceptara, el gobierno podría garantizar la permanencia de un instrumento directo de intervención en el territorio.

---

<sup>3</sup> Autodefensas Unidas de Colombia, grupo armado ilegal.

<sup>4</sup> Período de administración local en cabeza del Alcalde Sergio Fajardo Valderrama.

Hoy el país se encuentra ad portas de la firma de un nuevo acuerdo de paz pero ahora con la guerrilla de las Farc y se espera entonces la entrada en vigencia de un proceso de posacuerdo. De lo anterior surge un reto: diseñar, implementar y/o fortalecer estrategias en materia de convivencia ciudadana, que entre otros, permitan integrar a los reinsertados de este proceso a la vida civil. *Los Acuerdos de la Habana* como se han denominado estas conversaciones, han planteado la necesidad de promover la convivencia en todo el territorio nacional.

En el mismo sentido, tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos locales, deben involucrar a la ciudadanía en la implementación de los posacuerdos con el fin de lograr avanzar en el cumplimiento de los objetivos planteados. Actualmente se espera que a partir de la firma de los denominados *Acuerdos de la Habana*, se deba atender las demandas de la población reinsertada y acompañar a los demás ciudadanos en este proceso. Se hace necesario entonces un instrumento que articule, desarrolle y promueva estrategias para la promoción de la convivencia y la atención integral a la población reinsertada, sus familias y la ciudadanía del entorno.

En el caso de Medellín, en materia de gobierno local y convivencia, ya existe una estructura capaz de asumir los retos venideros a partir de la firma de los acuerdos de paz, y además dar respuesta a las peticiones y demandas tanto de la población reinsertada como del resto de la ciudadanía. No quiero terminar esta introducción sin antes mencionar que analizar las acciones de los gobiernos, para este caso el local, es relevante en la medida en que sus resultados permitan proponer acciones de mejora, modificación o reafirmación. Teniendo en cuenta que la actual coyuntura de la firma de los acuerdos de paz y la implementación del posacuerdo, se convertirá en materia de estudio durante su desarrollo e incluso en el futuro.

## **El Comité Local de Gobierno: instrumento de intervención público**

### *Descripción Metodológica*

La pregunta que motiva la elaboración de este artículo es, siendo el Comité Local de Gobierno un instrumento de intervención directo de la administración, ¿se encuentra éste preparado para la integración de estrategias que atiendan los retos derivados del posacuerdo (de la Habana) en materia de convivencia?. Esta pregunta apunta a la hipótesis que he formulado para este artículo en la cual afirmo que, al no existir una herramienta específica del orden nacional para ejecutar

las estrategias y acciones derivadas de los *Acuerdos de la Habana* en materia de convivencia, tanto en el área rural como en la urbana, el Comité Local de Gobierno ajustado será un instrumento eficaz de intervención pública – al menos en Medellín- para este caso.

Para lograr un desarrollo delimitado de este artículo, formulé como objetivos principales, identificar los logros alcanzados por el Comité Local de Gobierno en términos de eficacia con relación a la convivencia y al posconflicto en el periodo (2004-2007) en la comuna 7 de la ciudad de Medellín. Además de establecer las necesidades de adaptación que requiere el Comité Local de Gobierno como herramienta, con el fin de lograr eficacia en cuanto a la promoción de temas relacionados a la convivencia, que principalmente se derivarán de los retos venideros con la implementación del posacuerdo.

Para efectos del caso de estudio del CLG<sup>5</sup>, elegí en el municipio de Medellín que en su división político administrativa cuenta con 16 comunas en el sector urbano, y cinco corregimientos rurales, a la comuna 7, reconocida como Robledo. Esta comuna está ubicada en el occidente de la ciudad, constituida por 24 barrios y cuenta con cuatro de los seis estratos sociales establecidos en la ciudad de Medellín. Lo que consideré relevante para el tema, dada la variedad de condiciones sociales que ello representa.

Respecto de la metodología, la revisión bibliográfica de las obras de investigadores y teóricos locales e internacionales, fue fundamental para describir tanto los conceptos asumidos en este artículo, como para comparar la acción de gobierno con las definiciones establecidas en la teoría de la nueva acción gubernamental. Además, con el fin de elaborar un trabajo que logre describir los avances del CLG de la comuna 7 en materia de promoción de la convivencia, realicé una revisión de las actas elaboradas en el desarrollo mensual de las reuniones ordinarias del CLG, como lo establece el Decreto, y algunas de las actas que dieron cuenta de reuniones extraordinarias.

---

<sup>5</sup> Elegí la comuna 7 de Medellín por sus características sociales. En esta comuna a diferencia del resto, conviven la mayoría de los estratos sociales categorizados por la oficina de Catastro Municipal, es decir, desde el estrato 1 hasta el estrato 6. La comuna 7 cuenta con una estratificación que va desde el estrato 1 hasta el 4.

Con un enfoque cualitativo analicé la información recopilada como fuente primaria, mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas a los funcionarios encargados de la ejecución del Comité Local de Gobierno, entre ellas: el secretario de gobierno de Medellín; el coordinador del CLG de Medellín; la técnica social de la comuna 7 de Medellín y la inspectora de Policía de la comuna 7 de Medellín, todos nombrados para el período (2004-2007). También fueron aportantes las entrevistas a los funcionarios que coordinaron el Programa de Paz y Reconciliación de Medellín (PPR) en el mismo periodo (2004-2007), quienes articularon con el CLG acciones para cumplir los objetivos del proceso de desmovilización.

Lo anterior me permitió establecer los resultados de las acciones y motivaciones de los actores que conformaron el Comité Local de Gobierno pues

el significado de un instrumento y su atractivo para quienes toman las decisiones pueden rastrearse en última instancia hasta las percepciones individuales y los valores subjetivos que las refuerzan. La manera como los responsables de las decisiones y sus asesores de política perciben los instrumentos de política gubernamental condiciona sus opiniones acerca de las situaciones de los problemas, sesgan sus expectativas de desempeño y determinan sus selecciones. (Linder y Peters, 1993, p.5)

En el mismo sentido, el seguimiento permanente a la *Mesa de Conversaciones* que se viene dando desde el año 2012 y hasta la actualidad en la Habana-Cuba, entre el Gobierno Nacional y los líderes de la guerrilla de las Farc y sus *informes conjuntos*, me han permitido establecer los retos en materia de convivencia que deben ser afrontados en el territorio nacional, y que como referencia he tomado la comuna 7 de la ciudad de Medellín.

### *Marco teórico*

Inicio citando la afirmación que Leyva & Tabares (2015) hacen frente a la responsabilidad que tienen los gobiernos locales en materia de convivencia, pues “Se abre también la pregunta por las mejores maneras para actuar sobre los problemas y, por lo tanto, la necesidad de pensar en nuevos instrumentos de acción pública, lo que Salamon (2002) llama “la nueva gobernanza” (p.272). Esta tendencia también la expresan Ballart y Ramió (2000) quienes afirman que

la idea principal de la NGP (Nueva Gestión Pública) es la de romper con las grandes organizaciones públicas estructuradas jerárquicamente. Se entiende que la eficiencia reside

en unidades organizativas reducidas, descentralizadas, flexibles y autónomas, dirigidas por jerarquías menos altas y que son más propensas a facilitar la participación de los peldaños más bajos de la estructura o que están en contacto directo con los problemas. (p.73)

Incluso Salamon (2002) afirma que

mientras que a principios de la actividad gubernamental se limitaba en gran medida a la prestación de bienes o servicios desde la burocracia del gobierno (...) ha saltado más allá de las fronteras de la agencia pública y ahora (...) abarca la delegación de deberes ministeriales claramente definidos a los agentes del Estado regulando desde cerca. (P.2)

En este sentido, desde hace ya 11 años la Alcaldía de Medellín creó el CLG como interlocutor entre la administración municipal y la comunidad, diseñado con el propósito de coordinar todas las acciones referentes a la promoción de la convivencia como lo es la resolución pacífica de los conflictos y la integración de toda la vecindad en la ejecución de obras en favor de todos. A la luz de Lester Salamon, el CLG es un instrumento de intervención público, pues los *instrumentos de intervención públicos* son “Herramientas genéricas para la acción de los gobiernos, o las ‘técnicas’ de intervención social” (Salamon, 1981, p.256). Y que además a partir de ello “El gobierno establece una dirección más cercana a la comunidad, al ser el encargado de entregar los bienes y servicios directamente, por medio de sus burocracias, lo cual aumenta la legitimidad y facilita el monitoreo y la evaluación del funcionamiento del programa” (Salamon, 2002, p.52).

Veamos cómo lo estableció el Decreto 143 de 2005 en sus consideraciones

a) Que corresponde al Alcalde como primera autoridad de policía mantener y conservar el orden público y social dentro de la jurisdicción territorial del municipio de Medellín, y para el cabal cumplimiento de tal función, se hace necesario coordinar y articular las acciones de las autoridades municipales de policía. b) Que es función del Alcalde de Medellín, propiciar las condiciones necesarias para que tanto los habitantes de esta ciudad, como quienes transitan por ella, ejerzan sus derechos y cumplan con sus deberes, en la búsqueda de una prosperidad general. f) Que se hace necesario dar vida jurídica a un órgano administrativo encargado de ejecutar las políticas trazadas por la Administración Municipal en materia de seguridad y convivencia en cada comuna y corregimiento, servir de interlocutor entre la Administración Central y las comunidades de nuestro Municipio y reactivar los Consejos de Convivencia Ciudadana creados mediante Decreto 199 de 1995. (p.1-2)



Las anteriores consideraciones (a, b) reflejan las responsabilidades de la autoridad local en materia de seguridad y convivencia. Dicha responsabilidad requiere la correcta escogencia de las herramientas e instrumentos para su cumplimiento y en este sentido, se comprueba la validez que tiene el CLG como instrumento de intervención público a partir de lo expuesto por Leman (2002), quien considera que

en cuanto a la decisión de seleccionar este instrumento , el gobierno debe tener en cuenta cuatro circunstancias bajo las cuales la aplicación conduce a mejores resultados, o que incluso la pueden convertir en la única opción viable: 1) cuando se necesita legitimación, 2) cuando el conocimiento es exclusivo del gobierno, 3) cuando la distribución de los recursos es la meta principal, 4) cuando los temas de la política son estratégicos para el gobierno y, por lo tanto, no pueden perder la capacidad de ejecutarla. (p.49)

Así las cosas, las funciones del CLG “pretenden dar un marco institucional para incorporar a los actores sociales públicos y privados en la solución de problemas” (Sálamon, 2003). Permitiendo avanzar en la relación con la ciudadanía dado que “es una consecuencia de la tendencia contemporánea de considerar las interacciones entre sociedad y Estado más en sus dimensiones horizontales (el uno y el otro son socios) que verticales (el uno domina al otro o viceversa)” (Roth, 2009, p.31).

Este tipo de relaciones entre sociedad y Estado se enmarcan dentro de la descripción que hacen Leyva & Tabares (2015), sobre las características que deben cumplir las herramientas del gobierno para ser catalogados como *instrumentos de intervención públicos*. Y que evidencia a través de una herramienta que es utilizada cuando el gobierno necesita legitimación, cuando el conocimiento es exclusivo del gobierno, cuando la distribución de los recursos es la meta principal, cuando los temas de política son estratégicas para el gobierno y no pueden perder el control en su ejecución (p.277).

De igual manera, otra consideración que apoya la categorización del CLG como *instrumento de intervención público* es que

Los instrumentos deben ser seleccionados de acuerdo al contexto, las necesidades, los bienes y servicios entregados a través de los programas; según el objetivo del programa, la forma en que se quiere impactar a la población, los sistemas de coordinación o interacción con otros

actores que tienen intereses en la política pública, programa o acción del Gobierno, entre otras circunstancias. (Ibíd, 2005, p. 274)

Frente a lo anterior, en la clasificación de Leyva & Tabares sobre instrumentos de intervención públicos y las consideraciones del CLG, se encuentra concordancia en las características de legitimación al ser necesario mantener el orden público, el conocimiento exclusivo al propiciar las condiciones para ejercer derechos y cumplir deberes y cuando los temas del gobierno son estratégicos en la coordinación de las acciones policivas.

Igualmente, (Ibíd., 2015) sugiere que los instrumentos deben ser evaluados mediante las siguientes características: 1) *Direccionamiento*, si es o no implementado directamente, lo que permite que se pueda medir el grado en el que el gobierno que autoriza o diseña la intervención del programa está involucrado en su ejecución; 2) *Automaticidad*, que mide el grado en que este instrumento de política utiliza la estructura administrativa existente para producir su efecto en lugar de adquirir un nuevo aparato administrativo; 3) *Coercitividad*, que permite medir el grado en que este instrumento restringe el comportamiento individual o grupal en vez de desalentarlos (p.276-277).

Así las cosas, con el CLG la administración municipal establece una relación más cercana con la ciudadanía, al estar encargado de entregar bienes y servicios (*direccionamiento*), como la recepción de requerimientos y solicitudes, además de la entrega de la oferta institucional, logrando así aumentar la legitimidad. Frente a la *automaticidad*, este instrumento utiliza la estructura existente dado que establece como sus integrantes a funcionarios de carrera administrativa de la estructura vigente. Aquí es importante resaltar que esta estructura que funcionó para el proceso de desmovilización en 2004, está vigente para el proceso de reinserción que se avecina, sin la necesidad de crear un nuevo aparato administrativo.

Siguiendo con las características, otra de ellas aplicable es la *coercitividad*, que tiene que ver con su capacidad restrictiva frente al comportamiento individual o grupal. Teniendo en cuenta que la entrega o dejación de armas y la no repetición de delitos será fundamental para el cumplimiento de los compromisos por parte de las Farc y la responsabilidad del gobierno para garantizarlo.

También este instrumento coincide con la descripción que hace Leman (2002) frente a tres características desarrolladas en su función: a) Producción de actividades, en la entrega de bienes y servicios; b) Funciones policivas, implicando la legitimidad en el ejercicio de regulación y administración de justicia y la resolución de conflictos, y c) Funciones de facilitación, que son requeridas para que otras áreas de la administración, e incluso otras instituciones, sean capaces de realizar sus roles. (p.52)

Definido teóricamente el CLG como *instrumento de intervención* público, el enfoque del análisis es la convivencia, centrado especialmente en las acciones relacionadas a su promoción, que ilustran su relevancia en un posible escenario de posacuerdo que se espera sea uno de los resultados de los actuales diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc. Y para avanzar es importante tener en cuenta que los conceptos posacuerdo y convivencia son teóricamente nuevos<sup>6</sup>. Sin embargo, es posible acercarse a algunas definiciones sobre la convivencia las cuales afirman que esta genera un equilibrio que permite

“la resolución de dilemas sociales a favor del óptimo social, asegurar procesos políticos no predatorios tendientes a estructurar un juego de compromisos creíbles en los niveles micro, meso y macropolíticos; y en lo económico, estabilizar un juego incluyente de creación de la riqueza y del bienestar”. (Giraldo & Casas, 2015, p.50)

Del mismo modo, es importante mencionar que

Cuatro aspectos componen las variables que subyacen a la convivencia en un sentido operativo: la confianza como expectativa frente al actuar de otros; la reciprocidad como correspondencia mutua en el encuentro con los otros; la tolerancia expresada como forma de reconocimiento y respeto de formas y estilos de vida e identidad distintos al propio; y la expectativa normativa y empírica del cumplimiento de las normas sociales y las reglas formales por parte de los otros. En este sentido, la convivencia constituye el mecanismo microsocioal que expresa el funcionamiento del pacto social en el nivel cotidiano y local que funda a una sociedad democrática. (Ibíd., p.50)

---

<sup>6</sup> Giraldo & Casas (2015) afirman que tanto el concepto de posacuerdo como el de convivencia requieren mayor teorización dado que el “poco desarrollo teórico se relaciona con las fronteras difusas con términos como orden, cohesión social, inclusión social, coexistencia, integración social. No hay especificidad que demuestre la utilidad diferencial de su uso y existen escasas aproximaciones empíricas del término en los estudios”.

Estas consideraciones me llevan a una característica adicional con la que se puede contar, y es que la convivencia es más que no pelear, en el supuesto de que la convivencia genera un equilibrio que permite “la resolución de dilemas sociales a favor del óptimo social” (Ibíd, p.50).

Las anteriores definiciones teóricas en las que apoyo mi artículo, me permiten afirmar que en tanto el CLG cumple con las características descritas anteriormente, es viable que sea considerado un *instrumento de intervención público*. Al igual la convivencia juega un rol definitivo en un escenario de posacuerdo, dadas sus características intrínsecas de la relación interpersonal que involucra a la sociedad en la preparación e implementación de un posacuerdo.

Por último, al tener en cuenta la teoría anteriormente mencionada y la aplicación metodológica, me he permitido incluir en el capítulo siguiente mis consideraciones sobre el tema del que vengo ocupándome, pues como afirman Casas & Lozada (2008)

dentro de las categorías propuestas por Jürgen Habermas, el interés del conocimiento hermenéutico se clasifica como "práctico", es decir, el interés apunta a interpretar para orientar el dialogo inter-subjetivo y el compromiso social o político. Por consiguiente, los juicios de valor formulados por el investigador sobre los fenómenos estudiados constituyen un ingrediente imprescindible de su labor. (p.53)

## **La convivencia y el posacuerdo**

### ***La Experiencia***

En los últimos años, gran parte de los municipios colombianos ha empezado a introducir una serie de innovaciones en su administración pública, buscando un servicio más transparente, eficiente y de calidad, de cara a la ciudadanía. Estas innovaciones responden a transformaciones sociales, económicas y políticas que no sólo se viven en el país sino a nivel mundial, que implican una serie de cambios en la concepción y en la práctica de las administraciones públicas tanto nacionales como locales. (Ramírez, 2010, p.27)

Las estrategias de reintegración a la sociedad que desarrollan los gobiernos y la recuperación de la vida civil por parte de quienes se reinsertan de grupos armados, deben enfocarse entre otros a la promoción de la convivencia. Los reinsertados, pasan de ser actores armados que imponen un orden social paralelo al estatal, a ser los nuevos vecinos, con familias como cualquiera otra

persona, con conflictos personales y familiares, con proyectos y deseos de superación continua como la mayoría de la ciudadanía.

Entonces para una comunidad que recibe a estos nuevos vecinos, el reto que les corresponde es contribuir a la convivencia desde el perdón general, la aceptación y el respeto por la dignidad del otro. Y es ahí donde el gobierno local asume el rol más importante: procurar, promover y acompañar estrategias que apunten al logro de la convivencia en todos y cada uno de los barrios de su jurisdicción. Lo anterior se ha definido como gobernanza o gobernabilidad.

Y para lograr una efectiva gobernabilidad en una ciudad como Medellín, se requiere la implementación de estrategias y acciones encaminadas a solucionar problemáticas que en algunos casos son específicas en un sector de la población. Se hace necesario atender la demanda ciudadana con respuestas que permitan acertar con eficiencia y eficacia. Para ello, la administración cuenta con herramientas que le permiten intervenir la comunidad a nivel general o en casos específicos.

Esta tendencia ha llevado a los gobiernos locales a establecer nuevas formas de interacción con la ciudadanía, buscando solucionar de manera mancomunada los problemas sociales. Estos problemas pueden ir en aumento en la medida en que ciudades como Medellín incrementan su población y las complejidades que ello genera. Estos crecimientos demográficos y por ende, sus conflictos, deben ser atendidos y resueltos por las administraciones gubernamentales locales principalmente. Para ello es necesario desarrollar estrategias e implementar acciones cuyos propósitos sean dar respuesta eficaz y eficiente a estos problemas sociales.

Este es el caso del CLG que tiene como uno de sus objetivos: “Desarrollar y poner en práctica en la Comuna o Corregimiento, las políticas públicas trazadas por la Administración Municipal, con especial énfasis en los temas relacionados con el orden público, la convivencia y la seguridad”<sup>7</sup>. Desde su inicio en el año 2005, el CLG buscó retomar la gobernabilidad institucionalizando aquellos espacios que habían sido cooptados por los actores armados al margen de la ley y acompañar en el territorio, el proceso de desmovilización de la AUC (Salazar, 2016).

---

<sup>7</sup> Alcaldía de Medellín. Decreto 143 de 2005, Artículo 2º, Literal B.

Estos desmovilizados de la AUC a lo largo del conflicto, habían establecido en Medellín un régimen paraestatal de autoridad que pretendía entre otros, mantener la convivencia entre vecinos mediante la administración de justicia por medio de la intimidación e incluso del uso de la fuerza irregular. A lo anterior, considero que la convivencia no puede ser impuesta, al contrario tiene que ver con una condición cualitativa individual que aunada a las demás, produce un bien común que podría denominarse como lo afirman Giraldo & Casas (2015, p.49) “relaciones sociales positivas.”

Posteriormente, una de las estrategias del CLG se concentró en promover la convivencia entre los vecinos, mediante la búsqueda de su posicionamiento como ente regulador de la convivencia al interior de la comunidad. Para ello, los funcionarios procuraron el reconocimiento y la aceptación de los vecinos a través de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC), quienes acompañaban a la comunidad en los procesos de socialización de la estrategia de implementación del CLG como interlocutor entre el gobierno local y sus necesidades referentes a la convivencia.

En el mismo sentido, el CLG buscó la inclusión de la ciudadanía mediante el acercamiento a las “comunidades que menos contacto tenían con la administración municipal” (Álzate, 2016) con el fin de empoderar a los vecinos de sus derechos y deberes en relación al compromiso con la convivencia, entendiendo que “en este sentido, la convivencia constituye el mecanismo microsocial que expresa el funcionamiento del pacto social en el nivel cotidiano y local que funda a una sociedad democrática” (Giraldo & Casas, 2015, p.50).

Fue así como el CLG creó lazos de cercanía y confianza con la ciudadanía. El permanente acompañamiento de sus integrantes en las actividades colectivas de la comunidad y el interés de responder con soluciones a los problemas sociales que incluso no eran específica responsabilidad del CLG, visibilizó en la comunidad al gobierno municipal como autoridad legal y legítima.

En la reglamentación del CLG de la comuna 7, se estableció que éste debería reunirse como mínimo una vez al mes. En su desarrollo formal, realizaron mensualmente las reuniones de

trabajo<sup>8</sup>, en las cuales se evidenciaron las principales problemáticas relacionadas con la afectación de la convivencia. Tales problemáticas principalmente era las riñas entre vecinos; el alto volumen; el manejo indebido de las basuras; los conflictos y su resolución como el incumplimiento del pago de los arrendamientos o el no pago de las cuotas alimentarias de padres en proceso de separación.

Es importante aclarar que instituciones como la Inspección de Policía y las Comisarías de Familia ya existían en el territorio. Sin embargo, algunos integrantes de la comunidad en la búsqueda de soluciones para algunos de esos conflictos, recurrían a otros canales no institucionales. Es decir, integrantes de grupos armados que hacían presencia en la comuna 7, incluso hasta después del proceso de desmovilización.

Hasta este punto he mencionado la relación vecinal que se presupone sucede entre habitantes del sector basados en la confianza, la cual se entiende como:

la confianza como expectativa frente al actuar de otros; la reciprocidad como correspondencia mutua en el encuentro con los otros; la tolerancia expresada como forma de reconocimiento y respeto de formas y estilos de vida e identidad distintos al propio; y la expectativa normativa y empírica del cumplimiento de las normas sociales y las reglas formales por parte de los otros.” (Ibíd, p.50).

En este escenario un actor adicional entra a jugar un papel relevante, los desmovilizados de las autodefensas quienes pactaron con el gobierno nacional el 15 de julio de 2013 mediante la firma del *Acuerdo de Santafé Ralito* comúnmente conocido como el *Pacto de Ralito*, su desmovilización. El proceso de desmovilización como quedó pactado, duraría cerca de dos años y la primera de esas desmovilizaciones se llevó a cabo en Medellín el 25 de noviembre de 2013<sup>9</sup>. No obstante, el proceso de desarme total y reinserción a la vida civil se llevó a cabo durante los dos siguientes años. Estos nuevos vecinos, en su mayoría jóvenes, ahora ya no eran vistos como proveedores de justicia y seguridad, sino como integrantes de la comunidad desde una

---

<sup>8</sup> La revisión documental de las actas de reunión del Comité Local de Gobierno, comprende la temporalidad (2004-2007) y es importante mencionar que por la relevancia de los temas tratados, dicha documentación no cuenta con un carácter público, por lo cual, no es posible acceder a copias para soporte incluso académico del tema investigado. Sin embargo, se contó con la cooperación de la administración municipal para su revisión in-situ.

<sup>9</sup> Desmovilización del Bloque Cacique Nutibara.

perspectiva vecinal. Es a partir de este momento que el CLG toma total relevancia en la implementación de acciones para promover la convivencia en la comuna 7.

Ahora bien, el secretario de gobierno de Medellín en el periodo (2004- 2006) Alonso Salazar, afirma que la principal motivación para la creación de este comité, fue prepararse y preparar a la comunidad para el proceso de posconflicto, generado por la desmovilización de las AUC, en materia de convivencia para este caso. (Salazar, 2016). Del mismo modo, se creó el *Programa de Paz y Reconciliación* acordando en su primer artículo:

Institucionalizase en el Municipio de Medellín el programa de paz, Reconciliación y Reinserción, adscrito a la Secretaría de Gobierno del Municipio de Medellín, con el fin de darle continuidad a las políticas de paz que actualmente viene desarrollando la oficina de paz y reconciliación de la Administración Municipal y el Gobierno Nacional<sup>10</sup> (Alcaldía, 2016, p.1)

Los desmovilizados pasaron de ser actores del conflicto a convertirse en ciudadanos vecinos y se visibilizaron<sup>11</sup> en la comuna 7 con el fin de alcanzar la resocialización, el avance en el desarrollo individual, educativo y laboral. Algunas de las entrevistas realizadas en el marco de este artículo, permitieron evidenciar que los habitantes de la comuna 7, principalmente los estratos 4 y 5, manifestaron una percepción negativa frente a posibles conflictos generados por la presencia de jóvenes desmovilizados, lo que podría generar según ellos, una descompensación de la estabilidad social<sup>12</sup> (Casas, 2016).

Respecto a cómo integrar a estos nuevos vecinos, una de las acciones que realizaba el CLG, consistía en gestionar espacios de participación. El uso de la casa de justicia de la comuna 7 fue

---

<sup>10</sup> Programa que venía desarrollándose desde el año 2004 y que se reglamentó mediante el Decreto Municipal 71 de 2006, cuyo objetivo fue –entre otros- Artículo 2, numeral h. Fortalecer de manera integral los procesos de convivencia pacífica en los barrios del municipio de Medellín, a través de mecanismos de participación y organización. Y numeral i. Adelantar y promover actividades y programas culturales, deportivos, artísticos, educativos y recreativos que contribuyan a la convivencia ciudadana y a la participación e integración de las comunidades.

<sup>11</sup> Me refiero a que posiblemente ya habitaban el sector, pero que en la coyuntura del proceso de desmovilización, se hicieron visibles ante la comunidad como actores del conflicto, aun teniendo en cuenta que ya la misma comunidad los había identificado con antelación.

<sup>12</sup> Para esta población cuyas prioridades sociales –para este caso de estudio- se enmarcan principalmente en garantías de seguridad del vecindario, la presencia de desmovilizados en sectores cercanos era vista como una posible amenaza a su tranquilidad.



fundamental para realizar capacitaciones y generar confianza mediante la presencia y acompañamiento a las actividades en las que ellos estaban comprometidos. Así mismo, apoyaron el diálogo directo entre ellos y los vecinos, quienes los percibían como una amenaza. En este proceso la funcionaria María Idabelly Alzate, Inspectora de Policía de la comuna 7 y coordinadora del CLG (2004-2007) afirma que:

fuimos capaz (sic) de interactuar con ellos, ellos con nosotros y ellos reconocer la autoridad del inspector, del comandante de la estación, del comisario en el terreno, a tal punto de que ellos ya nos mandaban a nosotros la gente, el que tuvo el problema con la vecina no, es que vaya a la inspección donde la inspectora que ella es la que resuelve el problema (Alzate, 2016).

En ese sentido, Casas & Méndez (2011) afirman que en la medida en que la administración logra demostrar a la ciudadanía la capacidad y voluntad de responder a las necesidades sociales en términos de convivencia, la reciprocidad se evidenciaba en términos de la “lealtad y el respaldo de los ciudadanos a las autoridades y la ley” (p.52).

Buscando ese respaldo, el CLG de la comuna 7 avanzó en la cercanía con la comunidad mediante la recepción de quejas, reclamos y denuncias, en el reconocimiento de las acciones o dificultades evidentes que deterioraban la convivencia entre los vecinos. En este punto se hace necesario clarificar que la comuna 7 cuenta con variedad de estratos sociales, lo que a su vez marca una diferenciación entre los motivos que afectan la convivencia como lo expuse anteriormente.

Así mismo, el CLG representa un proceso de desconcentración administrativa que interviene de manera directa los espacios donde estaban los actores ilegales y sus entornos, donde el CLG coordinado con las entidades relacionadas con paz y reconciliación en el territorio se lograba mantener un acompañamiento y hacer seguimiento, aportando continuamente informes y sugerencias lo que evidenció la responsabilidad del gobierno frente a los temas de convivencia (Graciano, 2016).

Fue entonces un trabajo articulado entre el CLG y el *Programa de Paz y Reconciliación* lo que permitió avanzar conjuntamente en el acompañamiento a los desmovilizados en el proceso de

reinserción y en la promoción de la convivencia en la comuna 7. Una acción fundamental que da cuenta de esta articulación, se evidencia en lo dicho por el coordinador del programa

nosotros teníamos la posibilidad de acceder a la información que el Comité inicialmente no tenía y esa información -traducida en la posibilidad de accionar- (...) podía generar un mecanismo de resolución pacífica de conflictos (...) en un ambiente donde el Comité podía tomar decisiones con información de las partes y no de una sola de las partes” (Gaviria, 2016).

Esta convivencia no solo se promovía entre la comunidad y los desmovilizados sino también al interior de este grupo de desmovilizados mediante el diálogo y la búsqueda de soluciones concertadas. Convirtiéndose en un modelo eficaz para la promoción de la convivencia en la comuna 7, como caso de este artículo, siendo así un referente aplicable en otros espacios.

### ***El Reto***

Hoy 13 años después de la firma del *Acuerdo de Ralito* y 11 años del final de la entrega de armas por parte de las AUC, Colombia enfrenta un nuevo proceso de paz, pero ahora con un grupo guerrillero. *Los Acuerdos de Paz de la Habana* como se han denominado estas conversaciones, que se llevan a cabo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc, lo que insta tanto al gobierno central como a los gobiernos locales, a prepararse para asumir las responsabilidades que correspondan en este acuerdo nacional.

En este sentido, es posible establecer entonces el reto de la Mesa de Conversaciones que se lleva a cabo en la Habana, ha formulado en materia de convivencia:

“En un escenario de fin del conflicto, todos deben contribuir a avanzar en la construcción de una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización (...) con este objetivo acordamos que el Gobierno creará un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia (...) El Consejo tendrá como función asesorar y acompañar al Gobierno en la puesta en marcha de mecanismos y acciones que incluyen: el diseño y ejecución de un programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización (...) acordamos también establecer Consejos para la Reconciliación y la Convivencia en los niveles territoriales con el fin de asesorar y acompañar a las autoridades locales”. (Mesa de Conversaciones de la Habana, 2014, p.15)

Así las cosas, la responsabilidad ineludible para la administración local, es garantizar los mecanismos suficientes para promover la convivencia en la implementación del posacuerdo dado que como se afirma:

En primer lugar, la sociedad civil está inmersa en el conflicto, porque ella (es decir, todos sus miembros) es la víctima de quienes actúan por fuera de la ley, empleando la fuerza contra el derecho (...) Por esto es inaceptable la tesis de que los delincuentes combaten contra las autoridades legítimas respetando la vida, la libertad y los bienes de los particulares: no, éstos son sus víctimas, precisamente porque están indefensos y carecen de organizaciones de vigilancia y seguridad que los protejan, o ellas son insuficientes (Corte Constitucional, 1997, p.28).

Frente a estas responsabilidades igualmente sugiero ajustar el CLG incluyendo en el desarrollo de sus actividades, un componente psicosocial que garantice el acompañamiento integral a los reinsertados, teniendo en cuenta las implicaciones que se esperan se generen a partir de su integración a la sociedad<sup>13</sup>. Esta acción puede estar encaminada en tres áreas, una primera área de atención individual, la segunda en cuanto a la familia y la tercera corresponde al entorno. Esto permitiría un acompañamiento individual para el reinsertado y su familia y un trabajo social con la comunidad.

Igualmente, considero necesario retomar el tema de atención a los desmovilizados en el 2004 para lograr hacer una comparación con el reto actual. El acompañamiento psicosocial fue desarrollado a través del *Programa de Paz y Reconciliación*, a partir de 8 dimensiones<sup>14</sup> que se aplicaron a los desmovilizados de las autodefensas. Es importante tener en cuenta que comparados con los posibles reinsertados de las Farc, y si bien ambas poblaciones pudieron desarrollar características similares al ser actores del conflicto armado en Colombia, a su vez, era posible establecer diferencias en su perspectiva política y militar, lo que considero tiene implicaciones sociales.

---

<sup>13</sup> Según la encuesta de percepción sobre seguridad, victimización y convivencia en Medellín realizada por el Centro de Análisis Político de la Universidad EAFIT para la Alcaldía de Medellín, la confianza en los desmovilizados se acercó al 5% de los encuestados, al igual que al preguntar sobre la aceptación de ellos como vecinos, la cifra no sobrepasó el 34%.

<sup>14</sup> Estas dimensiones son: personal; educativa; habitabilidad; familiar; ciudadana; salud; productiva y seguridad.

Esta diferenciación que es de público conocimiento, y puede resumirse someramente en que las AUC fueron un ejército para estatal cuyo objetivo inicial era contrarrestar las acciones militares de las guerrillas. Por su parte, las Farc ha sido considerada una fuerza insurgente que desconoce al Estado colombiano y busca establecer un modelo socialista. Esta consideración me lleva a plantear que la percepción ciudadana frente a estos dos actores, puede convertirse en una dificultad de aceptación social, en la medida en que si bien los objetivos de cada grupo se oponían, uno parecía estar más cercano a los objetivos del Gobierno Nacional.

En el mismo sentido, indagando la percepción que pueden tener los posibles beneficiarios del programa de reinserción que deba implementarse, el actual coordinador del *Programa de Paz y Reconciliación* afirma que

Una de las críticas que le han hecho a este modelo y que por lo tanto no se puede adaptar a las Farc, es primero que es un modelo urbano y segundo que es un modelo individualista, de superación de la vulnerabilidad desde el punto de vista individual, porque nosotros le apostamos en este modelo a la reintegración individual (...) y otra de las dificultades es que esto es visto como un modelo contra insurgente, un modelo de seguridad contra insurgente, porque las Farc ven este modelo de reintegración como el modelo que atendió a sus enemigos paramilitares y a sus desertores desmovilizados individuales (Serna, 2016).

Lo anterior contiene una consideración adicional que me permite establecer la necesidad de dar un cambio en la estrategia si se pretende desde el Gobierno Nacional mantener el mismo modelo de atención a la población reinsertada. Lo anterior dado que aún no se conoce con certeza cuál será el programa o entidad encargada de la aplicación de acciones para la atención de dicha población.

Po lo que un aporte de este artículo es resaltar que hoy la administración municipal cuenta con el reconocimiento del CLG frente a la ciudadanía como instancia gubernamental de acceso inmediato por su operatividad in- situ. Esto ha permitido la cercanía con la comunidad por parte de los funcionarios adscritos al CLG permitiendo establecer canales de confianza y trabajo conjunto con el propósito de aportar a la generación de espacios propicios para promover el diálogo. Lo que evidencia que están en capacidad de atender las recomendaciones que se generen

desde los Consejos para la Reconciliación y la Convivencia<sup>15</sup>, tanto en materia de atención psicosocial como en la promoción de la convivencia.

Esta reflexión es útil en la medida en que permite evidenciar que la estructura del CLG se ha mantenido desde su creación y que incluso, con los ajustes sufridos mediante nuevos decretos<sup>16</sup> y dada su continuidad en el cumplimiento de sus objetivos, cuenta con el reconocimiento de la ciudadanía, de los beneficiarios y de programas de resocialización como el *Programa de Paz y Reconciliación*. Lo que me lleva a afirmar que el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Posconflicto, para el caso de Medellín, cuenta con una estructura ya establecida capaz de adaptarse para adelantar las acciones derivadas a partir de la implementación del posacuerdo en materia de convivencia e incluso de atención y acompañamiento psicosocial a la población reinsertada.

## ***Recomendaciones***

### *A la comunidad académica*

Para la academia, la implementación del venidero posacuerdo es una oportunidad para documentar en tiempo real, apoyados en los antecedentes, la verificación del uso del CLG como uno de los *instrumentos de intervención públicos*, además de las herramientas relacionadas al *gobierno directo*. Este trabajo puede generar un escenario académico que identifique los logros y las dificultades generadas en su desarrollo. De ahí que se hace necesario realizar este proceso académico de manera paralela e ininterrumpida.

Un posterior trabajo puede confirmar o falsear si la reconciliación a partir de procesos de terminación de conflictos armados, se ve o no afectada por las concepciones que tenga la sociedad frente a las tendencias políticas de extrema derecha y de extrema izquierda.

---

<sup>15</sup> Organismo que se espera, sea creado luego de la firma de los *Acuerdos de Paz de la Habana*.

<sup>16</sup> Mediante el Decreto Municipal 0832 de 2013, se agregó al CLG un funcionario con la denominación “Gestor Territorial de la Secretaría de Seguridad”. Este funcionario se incluye para apoyar las funciones que venía desempeñando en materia social el “Técnico Social”. Mediante el Decreto Municipal 1028 de 2014, se agregan al CLG las siguientes personas: El presidente de la Junta Administradora Local (JAL) y un delegado de la secretaría vice alcaldía de gestión territorial. Además se modifica el cargo del “Técnico Social” por “Promotor Local de Gobierno”

### *A la administración municipal de Medellín*

Presentar ante el Gobierno Nacional y su Ministerio del Posacuerdo, el Comité Local de Gobierno como instrumento de intervención público. El cual se encuentra estructuralmente diseñado para afrontar los retos venideros en la implementación del posacuerdo en materia de convivencia para la ciudad de Medellín.

### *Al Gobierno Nacional*

Tener en consideración que frente al reto de crear un órgano administrativo capaz de implementar estrategias que entre otros objetivos promuevan la convivencia en todo el territorio colombiano, pueden tomar como modelo el CLG de Medellín, que cuenta con una experiencia verificada con más de una década de funcionamiento, y que está en capacidad de afrontar los retos derivados de la entrada en vigencia del posacuerdo en materia de convivencia.

Esta capacidad instalada, además del esfuerzo político y administrativo que la administración municipal de Medellín en el periodo (2004-2007) aportó al proceso de desmovilización de las AUC, se concentra en el *Comité Local de Gobierno* “encargado de ejecutar las políticas trazadas por la Administración Municipal en materia de seguridad y convivencia en cada comuna y corregimiento, servir de interlocutor entre la Administración Central y las comunidades”

## **Conclusiones**

1. La administración municipal de Medellín en el periodo (2004-2007) se vio abocada a enfrentar el reto de recibir un número significativo de desmovilizados, luego de firmado un proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esta responsabilidad llevó al Secretario de Gobierno Alonso Salazar J., a la creación de un órgano administrativo encargado de ejecutar las políticas públicas formuladas para promover la convivencia y atender las demandas de la ciudadanía derivadas de la entrada en vigencia del proceso de desmovilización.
2. Este órgano administrativo se denominó *Comité Local de Gobierno*, integrado por profesionales de la Secretaría de Gobierno y de la Policía Nacional. Como sus principales

funciones le correspondió atender la demanda de la ciudadanía en materia de convivencia y promover el diálogo como principal mecanismo para la resolución pacífica de conflictos. Además de ser un apoyo fundamental para el *Programa de Paz y Reconciliación*, programa también adscrito a la Secretaría de Gobierno y que fue encargado entre otras responsabilidades, de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los desmovilizados a partir de la firma del acuerdo de paz.

3. El marco teórico me permitió demostrar que el CLG es un *instrumento de intervención público*, y que ajustado con miras al posacuerdo es el instrumento que actualmente el Gobierno Nacional requiere para ejecutar las estrategias que en términos de convivencia, se esperan surjan del actual proceso de paz. Para lograrlo, el Gobierno Nacional se comprometió a contribuir en la construcción de una cultura de reconciliación y convivencia; además de crear a los Consejos para la Reconciliación y la Convivencia en los municipios colombianos con el propósito de acompañar y asesorar a las autoridades locales. Este compromiso comprueba mi hipótesis que afirma que no existe actualmente un instrumento diseñado por el Gobierno Nacional para la promoción de la convivencia en el posacuerdo.
4. En el caso de Medellín, analizado el funcionamiento del CLG desde una perspectiva de instrumento de intervención público como lo describe Salamon (2002), es posible responder a la pregunta del artículo y concluir que en materia de gobierno local y convivencia ya existe una estructura capaz de asumir los retos venideros a partir de la firma de los acuerdos de paz, y dar respuesta a las peticiones y demandas de la comunidad. Además, las actividades realizadas por el CLG con el fin de promover la vecindad, el intercambio de experiencias, las tertulias y los debates frente a la toma de decisiones que afectan el entorno, han sido fundamentales para fortalecer los lazos de cercanía y credibilidad en el gobierno tanto local como nacional. Es necesario entonces que el CLG mantenga su actividad permanente en el territorio, resolviendo las diferencias mediante los mecanismos ya verificados de diálogo y discusión, además de las actividades que promueven la convivencia.

5. Este instrumento, CLG, incluso bien podría integrar a sus actividades la atención psicosocial de la población reinsertada que se espera llegue a la ciudad de Medellín. Aunque en el caso de la desmovilización en 2004 dicha atención se generó a partir del *Programa de Paz y Reconciliación*, para este caso ya el CLG cuenta con la capacidad instalada que le permite asumirla y además, aportarle al proceso información actualizada sobre los avances y necesidades de esta población.



## Referencias

- Alcaldía de Medellín & Universidad EAFIT. (2015). Encuesta de percepción sobre seguridad, victimización y convivencia en Medellín.
- Ballart, X. & Ramió, C. (2000). Los programas de reforma de las administraciones públicas a partir de los años setenta. En *Ciencia de la administración*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Casas, A. & Méndez, N. (2011). Cultura política de los jóvenes en Colombia 2004-2010. En M. Gutiérrez (Ed.), *Nuevas expresiones políticas*. Editorial Javeriana.
- Giraldo, J., & Casas, A. (Eds.). (2015). Seguridad y convivencia en Medellín: Aproximaciones empíricas a sus atributos y desafíos. Medellín: Secretaría de Seguridad, Alcaldía de Medellín - Centro de Análisis Político -Universidad EAFIT.
- Leman, Christopher (2002). "Direct Government", en: Lester Salamon, ed., *The Tools of Government: A Guide to the New Governance*, Nueva York: Oxford University Press.
- Leyva S. y Tabares J. (2015). Un diagnóstico de los instrumentos de gobierno de una política pública. En: *Análisis de política pública poblacional*. (Versión inédita).
- Linder, Stephen H., y Peters, B. Guy. (1993) *Instrumentos de gobierno: percepciones y contextos*. En: *Gestión y política pública*, vol II, número 1.
- Losada, R. & Casas, A. (2008). *Enfoques para el análisis político*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Ramírez B, María Fernanda. (2010). *Administración pública local*, en: *La Gestión Pública Local en el ámbito metropolitano*. Medellín: Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
- Roth, A.-N. (2009). Políticas Públicas. *Formulación, implementación y evaluación*. Bogotá D. C.: Ediciones Aurora.
- Salamon, Lester M. (1981). "Rethinking Public Management: Third-Party Government and the Changing Forms of Government Action", *Public Policy*, col. 29, número 3, Verano.
- \_\_\_\_\_. (Ed.) (2002). *The New Governance and the Tools of Public Action. In: The Tools of Government. A guide to the New Governance*. Nueva York: Oxford University Press.

## Referencias normativas

- Alcaldía de Medellín, Decreto 143 de 2005, "Por medio del cual se crean los Comités Locales de Gobierno en las comunas y Corregimientos del Municipio de Medellín y se reglamenta su funcionamiento".

\_\_\_\_\_, Decreto 71 de 2006, “Por el cual se institucionaliza el programa de Paz, Reconciliación y Reinserción en el Municipio de Medellín”.

\_\_\_\_\_, Decreto 0832 de 2013, “Por medio del cual se modifica el Decreto 143 de febrero 2 de 2005”.

\_\_\_\_\_, Decreto 1028 de 2014, “Por medio del cual se conforman y reglamentan los Comités Locales de Gobierno en las comunas y Corregimientos del Municipio de Medellín”.

CORTE CONSTITUCIONAL (1997) Sentencia C-572 . M.P. Jorge Arango Mejía y Alejandro Martínez Caballero.

### **Entrevistas**

Entrevista realizada por Mauricio Cañaveral R., a Alonso Salazar J. (Medellín, febrero 2 de 2016).

Entrevista realizada por Mauricio Cañaveral R., a Jorge Fernando Gaviria V. (Medellín, mayo 10 de 2016).

Entrevista realizada por Mauricio Cañaveral R., a Juan de Dios Graciano. (Medellín, febrero 26 de 2016).

Entrevista realizada por Mauricio Cañaveral R., a Marisol Casas. (Medellín, marzo 02 de 2016).

Entrevista realizada por Mauricio Cañaveral R., a María Idabelly Alzate. (Medellín, marzo 03 de 2016).

Entrevista realizada por Mauricio Cañaveral R., a Pablo Serna G. (Medellín, mayo 10 de 2016).

### **Internet**

Mesa de Conversaciones de la Habana. (2012, febrero-agosto). *Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera*. Recuperado de <https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf>

Mesa de Conversaciones de la Habana. (2014, enero). *Informe Conjunto*. Recuperado de <https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/INFORME%20CONJUNTO%20PUNTOS%201%20Y%202.pdf>